

## MOCIÓN PARA EL REFUERZO Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIAS MACHISTAS Y POLÍTICAS LGTBIQ

(Presentada al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 25.01.2019)

### Introducción justificativa de la Moción

La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional.

De hecho, el Estado español recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

La mencionada Ley integral y la Ley Canaria 16/2003, de Prevención y protección integral de las mujeres contra la Violencia de Género, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.

Los informes de Congreso y Senado, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.

Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.

Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del

catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Según la última *Macroencuesta sobre la violencia de género* realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:

- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en el Estado español.
- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.
- El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia.
- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre ellos:

- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género
- El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.

En cuanto a la violencia LGTBIQ, El informe “La cara oculta de la violencia contra el colectivo LGTBI “presentado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y el Observatorio Redes Contra el Odio resalta que en el 2017 se registraron 629 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género por las entidades LGTBI a través de sus servicios u observatorios.

332 casos de los 629 registrados por entidades LGTBI a lo largo de 2017, concluye que la violencia más prevalente es el acoso y la intimidación así como agresiones físicas y que en la mitad de los casos se dan dos o más incidentes a la vez.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales concluye que “sólo a través de cambios estructurales y una educación crítica que fomente una verdadera justicia, lograremos sociedades igualitarias donde la violencia de género y los delitos de odio contra el colectivo LGTBI sean residuales, porque estos hechos no son cuestiones ideológicas, sino una realidad constatada, y educar en el rechazo a la diversidad y promover los discursos de odio es sembrar la semilla del rechazo a la diferencia y a los derechos humanos, derechos que las instituciones públicas deben garantizar día a día”.

Solo afianzando a nivel estatal los derechos de las personas LGTBI a través de la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI se puede garantizar que las personas LGTBIQ no se vean amenazadas

ante posibles escenarios de inestabilidad política, como puede ser el ascenso de formaciones que niegan su realidad.

En este marco, el movimiento feminista y LGTBIQ de todo el Estado convocó el reciente 15 de enero una serie de concentraciones destinadas a mostrar el rechazo al vergonzoso pacto en Andalucía, donde todos esos derechos de las mujeres se han usado de moneda de cambio, rompiendo el consenso preexistente. Para ello, se han realizado maniobras mediáticas basadas en falsedades, en las que se ha puesto en duda la realidad de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres y de las personas LGTBIQ, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar las violencias de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas ni de las personas LGTBIQ.

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones feministas y LGTBIQ saben que en estas materias sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ. El odio y la negación sólo generan más violencia.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra las violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Asimismo es necesario no sólo no retroceder, sino avanzar en derechos para las personas LGTBIQ.

Por todo lo expuesto, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes **ACUERDOS**:

1. Apoyar las reivindicaciones del movimiento feminista que piden la garantía de que los derechos y libertades de las mujeres y personas LGTBIQ ganados hasta el día de hoy en el Estado español sean innegociables para dar pasos en contra de los mismos, mostrando nuestra repulsa al Pacto de gobierno de Andalucía donde han sido utilizados como moneda de cambio.
2. Reforzar las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género y seguir poniéndolas en valor, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.
3. Manifestar nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, nuestro compromiso para con las víctimas directas e indirectas, así como declarar tolerancia cero con los maltratadores, con aquellas personas que los intentan justificar y normaliza y con quienes manifiesten comportamientos LGTBIfóbicos.
4. Expresar nuestro rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a las violencias machistas, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas, así como nuestro rechazo a todo aquello que suponga un retroceso en los derechos de las personas LGTBIQ.
5. En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema, al tiempo que se rechaza el recorte de derechos de las pesonas LGTBIQ.

6. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir las violencias machistas, se compromete a impulsar la aplicación y mejora de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y de la Ley canaria 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, en coordinación con todos los poderes públicos. En la misma línea, el compromiso será desarrollar las políticas LGTBIQ que estén en su marco de competencias.
7. Seguir trabajando de forma transversal en todas las políticas de las diferentes áreas de esta institución las medidas dirigidas a combatir las distintas violencias machistas, uno de los problemas más graves que sufre actualmente la sociedad española y canaria, pero también todas las dirigidas a combatir las diversas manifestaciones de discriminación de las personas LGTBIQ.
8. Dar a conocer públicamente, mediante un comunicado institucional, la adopción de estos acuerdos plenarios.

Fernando Sabaté Bel

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife

Tenerife, a 21 de enero de 2019.